



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: MARÍA AURORA BERRÍO GÓMEZ
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Litis por pasiva: LEIDY ALEXANDRA ZÚÑIGA BERRÍO
Radicado: 05001 31 05 021 2018 00352 01
Sentencia: S-160

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 29 de octubre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARÍA AURORA BERRÍO GÓMEZ demandó a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente ÁLVARO ZÚÑIGA, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que convivió con el señor ÁLVARO ZÚÑIGA desde el año 1993, de cuya unión nació una hija, llamada LEIDY ALEXANDRA ZÚÑIGA BERRÍO; que su compañero falleció el 27 de septiembre de 1999; que inicialmente solicitó la pensión de sobrevivientes a nombre de su hija, quien para ese entonces era menor de edad; que mediante Resolución N° 05340 del año 2000, el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reconoció la pensión de sobrevivientes en un porcentaje de 50% a favor de su hija y en otro 50% a favor de la señora MARÍA DEL CARMEN ARROYAVE BARRIENTOS en calidad de cónyuge; que su hija viene recibiendo el 100% de la prestación desde el fallecimiento de la cónyuge del causante en el año 2005; y que solicitó el reconocimiento a su favor de la pensión, pero la entidad decidió negarlo según Resolución GNR 96097 del 30 de marzo de 2015.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de fallecimiento del causante, el reconocimiento de la prestación a la cónyuge e hija y lo relacionado con la resolución mediante la cual se le negó a la demandante la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada. Señala que no le consta la convivencia con el causante, lo que deberá ser probado dentro del proceso, advirtiendo que la pensión de

sobrevivientes causada ya le fue reconocida a la cónyuge e hija, sin que en ese momento la demandante se hubiera presentado a reclamar alegando su calidad de compañera permanente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes sin la acreditación de los requisitos legales, improcedencia del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, improcedencia de reconocimiento sin descuentos en salud, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Ante el reconocimiento previo de la pensión a LEIDY ALEXANDRA ZÚÑIGA BERRÍO en su calidad de hija del causante, mediante auto del 11 de julio de 2018 se dispuso su vinculación al proceso en calidad de litisconsorte necesaria por pasiva. Y una vez notificada de la demanda, se pronunció aceptando en su totalidad los hechos de la demanda y sin oponerse al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, quien además es su propia madre. La única excepción que propone es la de buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 29 de octubre de 2020, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente ÁLVARO ZÚÑIGA, pero solo a partir del momento en que la prestación dejó de ser reconocida a la joven LEIDY ALEXANDRA ZÚÑIGA BERRÍO, sin que pueda ser más allá del 9 de julio de 2019 cuando cumplió los 25 años de edad. CONDENÓ además a la indexación y las costas del proceso, absolviendo de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y autorizando realizar los respectivos descuentos al sistema de salud.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, indicando que no se aportaron las pruebas suficientes para demostrar el requisito de convivencia que alega la demandante. Sostiene que en verdad no hubo un apoyo, por lo menos en los últimos momentos de vida del causante cuando tuvo los quebrantos de salud, el cual si lo tuvo por parte de la cónyuge y sus hijos, lo que sirve de indicio para considerar que no existió una convivencia real. Frente a las testigos, indica que no dan claridad sobre las fechas de la convivencia y no aportan elementos que se puedan tener en cuenta para demostrar que en verdad existió una real convivencia, siendo carga de la prueba demostrar esos hechos.

De otro lado, respecto a las costas, dice que por ley es al juez al que le corresponde dirimir la controversia entre posibles beneficiarias, por lo que debe mirarse el carácter subjetivo de esa condena sin que deba imponerse simplemente por hacer cumplir lo que señala la norma. Finalmente, solicita se declare la excepción de cosa juzgada ya que el desistimiento produce los mismos efectos de la sentencia absolutoria, sin que se aporten hechos nuevos que permitan estudiar nuevamente las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro de la oportunidad legal, la entidad demandada presentó alegatos de conclusión recordando que la convivencia se erige como un elemento determinante para consolidar el derecho a la pensión de sobrevivientes según el contenido del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Señala que al proceso no se aportaron elementos de prueba suficientes para demostrar el requisito de convivencia de la demandante con el causante ÁLVARO ZÚÑIGA; en primera medida, la declaración de parte no es clara y se debe recordar que lo único que debe aportar

son los hechos susceptibles de confesión, como es que no hubo apoyo en los últimos momentos cuando el causante tenía quebrantos de salud, lo que ocurrió, según su propia declaración, con la cónyuge y sus hijos. Frente a los testigos, dice que ni la señora MARLENY RAMÍREZ ni la señora LIGIA DEL SOCORRO dan claridad sobre las fechas ni la convivencia, pues como lo señalan, no lo conocen y no lo recuerdan. Reitera la solicitud en cuanto a que se debe declarar la cosa juzgada, pues el auto que acepta el desistimiento produce los mismos efectos de la sentencia absolutoria, sin que se aporten hechos nuevos que permitían estudiar nuevamente la demanda. Finalmente, y de mantenerse la condena, solicita revocar la imposición de costas atendiendo al carácter subjetivo de la condena.

CONSIDERACIONES:

Uno de los argumentos que el recurrente expone tanto al sustentar la apelación, como en los alegatos en esta instancia, consiste en que debe acogerse la excepción de cosa juzgada ya que el desistimiento que la demandante presentó en un proceso anterior, produce los mismos efectos de la sentencia absolutoria, sin que se hubieren aportado hechos nuevos que permitan estudiar nuevamente las pretensiones de la demanda. Al respecto la Sala precisa que, a la vieja usanza, la técnica jurídica indica, en rigor, que solamente debe declararse probada una excepción perentoria cuando en los autos aparece probado un hecho en virtud del cual la ley desconoce la existencia de la obligación, o la declara extinguida, si alguna vez existió.

Es decir, si llega a concluirse que la parte demandante no acredita los fundamentos fácticos de sus pretensiones, simplemente el juez debe proceder a absolver de las súplicas respectivas; pero si, por el contrario, encuentra demostrado el derecho sustancial perseguido, debe acometer el examen de los medios exceptivos a fin de determinar si los mismos enervan o no la acción.

Al respecto es ilustrativa la sentencia del 27 de septiembre de 1977 proferida por la Corte Suprema de Justicia:

“Es evidente que el estudio de la excepción de prescripción, y de los medios exceptivos en general, por razón de su propia naturaleza, de elementales principios de lógica y del método que surge por imperativo de la ley para la adopción de una adecuada definición de los procesos judiciales, sólo procede cuando el fallador ha encontrado establecidos los hechos que dan lugar al nacimiento de los derechos reclamados y que, por lo mismo, son fundadas las pretensiones del demandante. El Juzgador deberá, por lo tanto, adelantar previamente el examen investigativo que lo conduzca a aquella conclusión y solo después de obtenido el resultado es dable penetrar en la averiguación de si las excepciones aducidas para extinguir o enervar los respectivos derechos se encuentran de igual modo, comprobadas en el juicio. Y ello es así, porque la eficacia de las excepciones está condicionada a la existencia de lo que con ellas se pretende expirar, morir o desaparecer” (G. J. CLX, pág. 976).

Lo anterior para señalar que se estudiará en este caso, inicialmente, si el derecho sustancial de la demandante nació a la vida jurídica, pues solo en caso afirmativo, deberá abordarse el tema de la cosa juzgada.

Bien. Es claro que la demandante MARÍA AURORA BERRÍO GÓMEZ, aspira con la presente acción judicial se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de quien dice era su compañero permanente, el Sr. ÁLVARO ZÚÑIGA, hecho ocurrido el día 27 de septiembre de 1999, pues considera que reúne el requisito de la convivencia con el causante establecido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, aunque tal circunstancia, según dice la entidad, no fue probada en el proceso.

Ante todo, es conveniente dejar en claro que los siguientes aspectos fácticos no han sido objeto de discusión dentro del proceso:

i) El señor ÁLVARO ZÚÑIGA falleció por causas de origen común el 27 de septiembre de 1999 (fl. 5);

ii) El 17 de noviembre de 1999, la demandante se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes en nombre de su hija menor de edad, LEIDY ALEXANDRA ZÚÑIGA BERRÍO, nacida el 8 de julio de 1994, fls. 6 y 7.

iii) Mediante Resolución N° 05340 del 7 de abril del año 2000, el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES resolvió de manera conjunta la solicitud que ella había presentado en representación de su hija, junto con la que también había radicado la esposa del causante, señora MARÍA DEL CARMEN ARROYAVE BARRIENTOS, dando lugar al reconocimiento de la pensión en un porcentaje de 50% a favor de cada una de estas, fls. 7 a 10.

iv) Fue apenas el 26 de septiembre de 2014 cuando la demandante se acercó ante COLPENSIONES a reclamar a su favor la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, la que se negó por medio de la Resolución GNR 96097 del 30 de marzo de 2015, fls. 12 y 13.

v) La señora MARÍA DEL CARMEN ARROYAVE BARRIENTOS falleció el 20 de julio del año 2005, fls. 54.

El reconocimiento de la prestación en el año 2000, tanto a la cónyuge como a la hija del señor ÁLVARO ZÚÑIGA, es suficiente para considerar que efectivamente la pensión de sobrevivientes que se debate en el proceso debe ser reconocida a quien acredite los requisitos legales, pues la causación como tal de la prestación no es objeto de controversia, en tanto aquella fue reconocida gracias a que el afiliado reunía el requisito de la densidad de semanas que en ese entonces exigía la ley.

Ahora bien, es preciso recordar que cuando de pensiones de sobrevivencia se trata, por regla general, la fecha de fallecimiento del causante es la que marca la pauta para efectos de identificar la norma a tener en cuenta para el estudio de los requisitos que se exigen para su procedencia. Así la ha definido pacífica y reiterativamente la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal y como puede consultarse en las siguientes sentencias: la del 2 de marzo de 2007, radicado 27.593; la del 29 de noviembre de 2011, radicado 40.055; la del 21 de marzo de 2012, radicado 43.572; la del 30 de enero de 2013, radicado 41024; la SL 13644 del 23 de agosto de 2017, radicado 53.043; la SL 4960 del 7 de noviembre de 2018, rad. 65836; la SL 4559 del 23 de octubre de 2019, rad. 74456; y más recientemente la SL 414 del 27 de enero de 2021, radicado 69788.

En este orden, atendiendo al fallecimiento del señor ZÚÑIGA el 27 de septiembre de 1999, significa que la norma aplicable es la ley 100 de 1993 en su texto original, y para ello debemos acudir a lo establecido en su artículo 47 según el cual: *“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superviviente, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte...”*

Según la disposición y en desmedro de los intereses de la demandante, tal hipótesis normativa presupone la existencia, como beneficiario único, o bien de la cónyuge o bien del compañero o compañera permanente, según se deduce de la o disyuntiva del texto del artículo, para lo cual se les otorga un trato igualitario atendiendo a la noción natural que el constituyente de 1991 confirió al concepto de *“familia”*, en los términos del artículo 42 de la Carta en cuanto la concibe como el núcleo fundamental de la sociedad, constituida por vínculos que pueden ser tanto jurídicos como naturales, originada en

la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

Ocurre que, si la norma que se requiere aplicar es el texto original del artículo 47 de la ley 100 de 1993, ello supone la imposibilidad de que se reconozcan los derechos a cónyuge y compañera por una cohabitación simultánea, tema respecto del cual se ha ocupado la jurisprudencia laboral de tiempo atrás como lo hizo en sentencia del 15 septiembre de 2004, radicación 21954, cuando dijo lo siguiente:

“En efecto, esta Sala ha sostenido reiteradamente que en caso de convivencia simultánea del fallecido con la cónyuge y la compañera permanente, el derecho corresponde a la primera de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994 (ver, entre otras las sentencias del 3 de marzo de 1999, radicado 11245 y del 30 de abril de 2003, radicado 19704). De suerte que la consideración del Tribunal para otorgar el derecho pensional a la esposa, partiendo de la convivencia entre los cónyuges López - Jaramillo, no puede ser destruida con la demostración de que el causante convivía también con su compañera permanente porque ello puede llevar a lo sumo a establecer una convivencia simultánea con ambas, en las condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993, que no sería suficiente para arrebatar el derecho a quien se le otorgó, sino más bien para reafirmarlo”.

Ahora bien, el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, citado en esta reseña jurisprudencial, fue anulada por el Consejo de Estado mediante providencia del 8 de octubre de 1998 en su inciso 2º, relativo a los eventos en los cuales se consideraba faltar el cónyuge. Pero, el inciso primero que estableció la primacía del derecho del cónyuge en la eventualidad estudiada y solo confirió la prerrogativa al compañero o compañera permanente a falta de aquel, permaneció intacto.

Se advierte además que aquel criterio jurisprudencial desarrollado desde 1999, ha sido reafirmado en múltiples y posteriores

providencias como la SL 14078 del 7 de septiembre de 2016, rad. 45073; la SL 116 de 2018 o más recientemente la SL 2994 del 24 de julio de 2019, rad. 77729. En la primera de las mencionadas, se indicó lo siguiente:

“... la Sala tiene adoctrinado que al amparo de esta normatividad, en concordancia con el art. 7° del Decreto 1889 de 1994, frente a la eventualidad de coexistir una convivencia simultánea del causante con la cónyuge supérstite y la compañera permanente, debe preferirse a la primera, en tanto es quien tiene la vocación de acceder a la prestación económica, pues la ley vigente para esa época la privilegia en caso de darse la situación que aquí se presenta.

Ya la Corte en diferentes oportunidades ha dejado sentado ese criterio de darle prelación a la cónyuge, por encima de la compañera permanente, cuando el fallecimiento del asegurado ocurre en vigencia de Ley 100 de 1993 (por ejemplo se puede consultar las sentencias CSJ SL, 15 mayo. 2012, rad. 42497 y SL 13235-2014, 24 sept. 2014, rad. 44806).

Pero incluso, se trata de un criterio jurisprudencial que no es exclusivo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues también la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de ocuparse del tema según reciente sentencia SU 461 de 2020, en la que igualmente se refirió a la imposibilidad de reconocer la pensión de sobrevivientes de manera simultánea a dos beneficiarias cuando de la aplicación del texto primigenio de la ley 100 de 1993 se trata:

*“... la modificación normativa incluyó dos supuestos: (i) la existencia de una unión marital de hecho y de una sociedad conyugal anterior no disuelta, pero con vínculo matrimonial vigente y (ii) la convivencia simultánea, casos en los cuales el Legislador, a partir de 2003, previó la división proporcional de la prestación entre la esposa y la compañera permanente del causante, en relación con el tiempo convivido con él. **Ambos escenarios, junto con su consecuencia jurídica, solo fueron***

incluidos con la Ley 797 de 2003 y no fueron considerados por la versión original del artículo 47 tantas veces mencionado.

(...)

“Según la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la convivencia con la cónyuge o la compañera permanente descartaba la admisión jurídica de la cohabitación con la otra. La simultaneidad de las formas familiares no era una posibilidad admitida por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la singularidad del vínculo era constitutivo del derecho a la sustitución pensional.

(...)

Síntesis de la decisión

(...)

En primer lugar, sobre el defecto sustantivo, la Sala encontró que al caso le es aplicable la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exigía tanto del cónyuge como del compañero permanente acreditar dos años de convivencia con el causante, anteriores a la muerte de este. Tal como lo encontró la Corte Suprema de Justicia, la actora como esposa del pensionado, no acreditó cumplir este requisito. Así, pese a que ella solicita que se le aplique la “preferencia” de la esposa en relación con la compañera permanente en los escenarios de convivencia simultánea, lo cierto es que sin que la señora Alviar haya acreditado la convivencia como cónyuge, la cohabitación paralela no se verifica en este caso, sin que resulte pertinente la aplicación de norma alguna, legal o jurisprudencial, que rija esos eventos. **No son aplicables las normas posteriores (Ley 797 de 2003 y jurisprudencia de esta Corporación emitida en relación con ella) que normaba estos escenarios y les otorgaba consecuencias jurídicas diferentes, tendientes a la repartición equitativa de la prestación.** De aplicarlas, se cercenaría el derecho adquirido de quien cumplía los requisitos de la legislación anterior, para acceder al 100% de la prestación.” (Resalta la Sala)

Es indudable entonces, que, en este caso, para entender a la señora MARÍA AURORA BERRÍO GÓMEZ como beneficiaria de la pensión de

sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, debía demostrar no solo que convivió con el causante durante sus dos últimos años de vida, sino además que, la cónyuge del causante, a pesar de haber disfrutado de la prestación, en realidad nunca tuvo derecho a ella.

Y del estudio que del material probatorio se ha realizado, encuentra la Sala que la convivencia que legalmente se exige no se logró acreditar en el proceso, especialmente según la información recopilada por el propio INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en aquella época en que no solo la cónyuge presentó la reclamación, sino también cuando la misma demandante lo hizo, aunque en aquella oportunidad en nombre de su hija LEIDY ALEXANDRA quien para ese entonces era menor de edad.

Para esa conclusión resulta fundamental un documento que se encuentra en el expediente administrativo aportado por COLPENSIONES identificado como GRP-HPE-ES-CC-6488150_4. En él aparece, por ejemplo, la historia laboral del causante, el listado de documentos que en ese entonces exigía el ISS ante una reclamación de este tipo, el formato de reclamación de pensión de sobrevivientes, la copia de la cédula de ciudadanía de la reclamante y el certificado de supervivencia. Pero el que realmente interesa se denomina **“DECLARACIÓN DE COMPAÑERA (O) PERMANENTE”**, el cual, fechado el 28 de octubre de 1999, además de contener los datos básicos de la demandante MARÍA AURORA BERRÍO GÓMEZ, incluye un cuestionario con una serie de respuestas que no la favorecen a la hora de establecer su calidad de beneficiaria de la pensión.

Se le pregunta a la interesada: *“CUÁNTOS AÑOS DE UNIÓN MARITAL TUVO USTED CON EL FALLECIDO?”*, responde: *“3 AÑOS”*. Posteriormente se pregunta: *“HASTA CUANDO FUE ESA UNIÓN MARITAL? HASTA EL AÑO DE 1996”*; el siguiente interrogante dice: *“CON QUIEN CONVIVÍA EL (LA) ASEGURADO (A) AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO Y DESDE HACÍA*

CUANTO TIEMPO?", a lo que responde: *"EN LA CASA DE ÉL Y DESDE HACE TRES AÑOS"*.

Resta por indicar simplemente, respecto a ese documento, que en su parte final aparece firmado por la demandante con la inclusión de su huella correspondiente al índice derecho, siendo un documento desconocido por el Juez de Primera Instancia que cuenta con pleno valor probatorio.

En cualquier caso y aun obviando tal situación, del conjunto de pruebas que se allegaron al proceso no es posible inferir que el causante no hubiera convivido con su esposa hasta la fecha de la muerte y en los 2 años inmediatamente anteriores, lo que pudiera dar paso a que, en su condición de compañera permanente, siempre que se acreditara esa misma convivencia, se considerara a la señora MARÍA AURORA como beneficiaria de la prestación.

Por el contrario, de tales pruebas se pudo establecer que cuando el causante falleció con quien convivía era precisamente con su esposa e hijos, lo que fue justificado en el hecho de que el señor ZÚÑIGA comenzó a sufrir una enfermedad que requería de ciertos cuidados permanentes que la demandante, por la necesidad de laborar para garantizar el sustento de sus hijos, no podía proporcionarle. Situación que incluso resulta de cierta manera contradictoria si se tiene en cuenta que la demandante MARÍA AURORA, en su interrogatorio, dijo que la muerte del señor ÁLVARO la tomó por sorpresa ya que él no tenía ninguna enfermedad grave y no se quejaba de ningún tipo de dolor, siendo la única molestia que padecía el hecho de que constantemente sufriera de fiebre, pero sin advertir que se tratara de una persona que no pudiera valerse por sí misma o que tuviera una condición delicada de salud que necesitara un cuidado constante.

Así las cosas, teniendo en cuenta la imposibilidad legal de que la pensión de sobrevivientes en aplicación de la ley 100 de 1993 se

reconozca de manera simultánea a dos beneficiarias, pero advirtiéndole además que la propia demandante desde 1998 había informado al ISS de su separación del causante y la no cohabitación para la fecha de la muerte y desde hacía 3 años atrás, y sin que tampoco se hubiera demostrado que en realidad la cónyuge no tuviera derecho alguno, ninguna posibilidad existe de que la pensión de sobrevivientes que en esta oportunidad se reclama le sea reconocida.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser revocada, para en su lugar ABSOLVER a la ACP COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante.

Y, con base en lo dicho al inicio de estas consideraciones, innecesario se hacer el estudio de la excepción de cosa juzgada.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia estarán a cargo de la demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el día 29 de octubre de 2020. En su lugar, **ABSUELVE** a la ACP COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia estarán a cargo de la demandante.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 124 del 16 de julio de 2021

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 5b04c0f1327e2e5cdc73219b8509e7a1bbb1ce4171e98df8963d52eb5a6eb245
Documento generado en 15/07/2021 03:35:35 PM